



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 32021/2024 - AML

Autos: "EBBEKE PEDRO LUIS c/ AFIP-DIRECCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA"

Sentencia Definitiva del Expte. Nº 32021/2024"

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

I.- Surge de autos que mediante la Resolución N ° 2024- 291-E-AFIP -DVJUDC#SDGT por la cual no hace lugar a la impugnación planteada por el responsable EBBEKE Pedro Luis.

II.- Asimismo se hizo saber a la impugnante que la presente es susceptible de ser revisada a petición de la contribuyente, y que el recurso está sujeto al depósito del importe de la deuda que en definitiva se establezca por aplicación de los regímenes de actualización e intereses que correspondieren, el que deberá hacerse efectivo dentro del mismo plazo en que dicho recurso puede interponerse (art. 9 ley 23.473 y art. 15 de la ley 18.820 modificado por el art. 14 de la ley 26.063).

III.- Contra ello, se interpuso recurso de apelación en cual solicita, se admita el recurso sin dar cumplimiento a la carga de orden formal a que hace referencia el art. 39 inc. b) última parte del Dto. Ley 1285/58.

Así delimitada la incidencia, corresponde destacar que el art.15 de la ley 18.820 (modificado por ley 23.473) expresamente dispone que "...deberá depositarse el importe de la deuda resultante de la resolución administrativa; su omisión producirá la deserción del recurso", en tanto que el art. 39 bis inc. b) del decreto ley 1285/58 establece como requisito de admisibilidad del recurso que dentro del plazo de interposición "se hubiere depositado el importe resultante de la resolución impugnada".

En tal sentido, estimo que la doctrina emanada del Fallo de la Corte Suprema en autos "Microomnibus Barrancas de Belgrano" (CSJN, sent. del 21/12/89, DT 1991 B, pág. 1705 ss), resulta aplicable en la causa, pues la misma no ha perdido virtualidad por la sanción de la reforma de la que fue objeto nuestra Constitución Nacional en 1994.

Ello así, toda vez que si bien el Alto Tribunal admite la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su – actualización monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica.

Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los



tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).

En síntesis, dentro de este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aceptado la posibilidad de eximir de la exigencia del pago previo a la apelación en supuestos de excepción que contemplen situaciones patrimoniales concretas de los afectados a fin de evitar que aquél pago se traduzca en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio. A tal efecto estableció, con el objeto de evitar que las excepciones desvirtuaran la aplicación del principio general, que lo que ha de valorarse para eximir el pago inmediato en el supuesto de multa, no son las dificultades de su oblación, derivadas de desequilibrios financieros o de circunstancias particulares del giro de los negocios de la demandada, sino que a – través de ella, se verifique un importante desapoderamiento de bienes de la entidad (doctrina de Fallos 247:181).

Ello así, es claro que este importante desapoderamiento, requiere en consecuencia, dado su carácter excepcional, una prueba fehaciente, que ha de ser aportada por quien pretende eximirse del pago. Asimismo, con respecto a la producción de prueba solicitada por la recurrente, resulta improcedente ya que exorbita la competencia que está atribuida a esta Alzada en su carácter de instancia judicial de revisión. (cfr. art. 8 ° de la ley 23.473. mod. por ley 24.463).

Por tanto, siendo que en autos no se han objetivado los supuestos que, autorizarían eximir a la recurrente del depósito previo exigido por los art. 15 de la ley 18.820, 39 bis del decreto ley 1285/58 sustituido por el art. 26 de la ley 24.463, como requisito para la admisibilidad del recurso deducido, por lo que correspondería declarar desierto el remedio procesal intentado en virtud de no haberse cumplido lo dispuesto por la normativa legal citada.

III- Dado el resultado alcanzado, dada la particularidad de la temática abordada, pudo válidamente generar en la parte actora la creencia de que contaba con un mejor derecho a litigar o, al menos, de lograr esa respuesta en el ámbito judicial. Por esa razón, las costas de ambas instancias deben distribuirse en el orden causado (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

La Dra. Victoria Pérez Tognola no vota en virtud de hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Por ello, este TRIBUNAL RESUELVE: I- Declarar desierto el recurso interpuesto; II- Costas por su orden.

Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, remítase.

